



RESOLUCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 0268-2024-DGA-UNP

Piura, 04 de junio de 2024

VISTO:

El expediente N° 235-4102-24-1 fecha 30.04.2024, presentado por la **Dra. Margarita Távara Alvarado**, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, prescribe: "(...) Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes (...)";

Que, mediante Ley N°13531 del 03 de marzo de 1961, fue creada la Universidad Nacional de Piura, cuya sede está ubicada en el Distrito de Castilla, Departamento de Piura, cuyos fines se encuentran estipulados en el artículo 8 del Estatuto de la Universidad Nacional de Piura, Aprobado en Sesión Plenaria de Asamblea Estatutaria del 13.Oct.del 2014 (Ley N° 30220-Ley Universitaria);

Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, prescribe: "(...) La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable (...)"; asimismo, los numerales: 8.4 Administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo, y; 8.5 Económico, implica la potestad auto determinativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos, manifiesta los regímenes de su autonomía;

Que, mediante Carta N° 001-2024-JM-TSI-GMAR de fecha 30 de abril de 2024, la señora Graciela Margot Ayala Rosas, identificada con DNI 02867437, representante legal de la empresa JM Tecnología y Soluciones Informáticas con RUC 10028674371 se dirige a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, para manifestarle que luego de la ejecución en la prestación de sus servicios durante el mes noviembre del año 2023 en el servicio "Acondicionamiento de ambiente de radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNP", solicita el pago del servicio de acuerdo a lo ejecutado con un monto de S/ 25,000.00 y así mismo el pago de S/ 2,500.00 equivalente al 10% por el concepto de intereses moratorios, demora o retardo en el pago, la cual hasta la fecha no se ha cumplido;

Que, con Oficio N° 350-2024-D-FCCSSE-UNP de fecha 30 de abril de 2024, la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, solicita el reconocimiento de pago del servicio "Acondicionamiento del ambiente de radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNP", ejecutada en el mes de noviembre por la empresa JM-Tecnologías y Soluciones Informáticas con RUC 10028674371, con un monto de S/ 25,000.00 y así mismo el interés moratorio por la demora en el pago correspondiente al 10% la cual asciende a S/ 2,500.00;

Que, con Informe N° 060-2024-ABAST-UNP de fecha 08 de mayo de 2024, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, manifiesta que Revisado el expediente administrativo existe el Oficio N°0350-2024-D-FCCSSE-UNP, donde se puede deducir que la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, emite su conformidad de la ejecución del servicio "Acondicionamiento del ambiente de radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNP", a favor de Graciela Margot Ayala Rosas con RUC N° 10028674371. Al respecto la Unidad de Abastecimiento, señala que, revisando el Sistema Administrativo de Gestión, no se encuentra contrato u orden de servicio a favor de la referida empresa, sin embargo, existiría conformidad de su ejecución por parte del área usuaria. Finalmente, en caso la Universidad Nacional de Piura, opte por reconocer directamente a la señora Graciela Margot Ayala Rosas, con RUC N° 10028674371, el monto del servicio debería ser únicamente por el costo real del servicio; es decir S/ 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles) sin intereses moratorios toda vez que dicho concepto únicamente correspondería cuando exista una debida contratación así como la emisión de conformidad con anterioridad al requerimiento de pago, situación que no se presenta. Asimismo, CONCLUYE: 4.1. Sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios y Ex funcionarios públicos, que incumplieron con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normativa para una adecuada contratación. 4.2. Luego de haberse advertido la configuración de los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, corresponde a la alta dirección, en una decisión de su exclusiva responsabilidad, el reconocer de forma directa el monto de S/ 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles) a favor de Graciela Margot Ayala Rosas con RUC N° 10028674371. De ser ese el caso, es preciso que la Entidad coordine cuando menos con su área de Asesoría Jurídica interna y con la de Presupuesto;

Que, con Oficio N° 732-2024-OCAJ-UNP de fecha 10 de mayo de 2024, el Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, se dirige a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en virtud a lo señalado en el Oficio N° 350-2024-D-FCCSSE-UNP, remitirle el expediente a efectos que se sirva coberturar el monto señalado, ello en virtud a lo normado en la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2024 – Ley N° 31953; máxime si se cuenta con opinión por parte del Jefe de la Unidad de Abastecimiento en su Informe N° 060-2024-ABAST-UNP de fecha 08 de mayo de 2024;





UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 0268-2024-DGA-UNP

Piura, 04 de junio de 2024

Que, con Informe N° 0734-2024-UP-OPYPTO-UNP de fecha 14 de mayo de 2024, suscrito por la Jefa de Planeamiento y Presupuesto y el Jefe de la Unidad de Presupuesto, informa que revisado el Oficio N° 732-2024-OCAJ-UNP de fecha 10 de mayo de 2024 e Informe N° 060-2024-ABAST-UNP de fecha 08 de mayo de 2024 donde concluyen, que el reconocimiento de deuda directa es decisión y responsabilidad de la Alta Dirección. Por lo que informan que para poder asignar marco presupuestal se tiene que proporcionar el clasificador de gasto que correspondería a dicha deuda;

Que, con Oficio N° 1531-2024-ABAST-UNP de fecha 21 de mayo de 2024, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, da respuesta al Informe N° 0734-2024-UP-OPYPTO-UNP de fecha 14 de mayo de 2024 sobre reconocimiento de deuda, indicando que el clasificador de gasto a utilizar es el 2.3.24.21;

Que, mediante Certificación Presupuestal N° 0308-2024-UP-OPYPTO-UNP de fecha 27 de mayo de 2024, suscrito por la Jefa de la Oficina Central de Planeamiento y Presupuesto y el Jefe de la Unidad de Presupuesto, asignan cobertura presupuestaria para atención y trámite correspondiente en:

Cadena Funcional Programática:

Certificación Web N° 3564

Meta PPTARIA	Nombre de meta presupuestal	Fte. Fto.	Específica de gasto	Nombre específica de gasto	Monto
0019	Mantenimiento y operación de la Infraestructura y equipamiento	RO	23.24.21	De edificaciones, oficinas y estructuras	S/ 25,000.00
TOTAL					S/ 25,000.00

Asimismo, precisa que, la emisión de la presente Priorización Presupuestal sólo garantiza la existencia del crédito presupuestario mas no convalida ni representa autorización para ejecutar gastos (compromiso, devengado y giro);

Que, mediante Oficio N.º 670-2024-OCAJ-UNP, de fecha 29 de mayo de 2024, el Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, manifiesta que amparado a lo señalado por el Jefe de la Unidad de Abasteciendo mediante Oficio N° 060-2024-ABAST-UNP, así como por la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación mediante Oficio N° 0350-2024-D.FCCSSE-UNP y la Certificación Presupuestal N° 308-2024-UP-OPYPTO-UNP emitida por el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; además de la base legal señalada en la presente; OPINA que: a) Que, se debe declarar **PROCEDENTE** el requerimiento de pago favor de doña GRACIELA MARGOT AYALA ROSAS en calidad de Representante Legal de la empresa JM TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS; por reconocimiento del pago del servicio "ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DE RADIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA" por la cantidad ascendente a VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES (S/25,000.00); ello en mérito a la Certificación Presupuestaria N° 0308-2024-UP-OPYPTO-UNP. b) Que, respecto al monto señalado por la representante legal de la Empresa JM Tecnología y Soluciones Informáticas, ascendente a dos mil quinientos y 00/100 soles (S/. 2,500.00) referente al 10% por concepto de intereses legales; eso deviene en improcedente por cuanto dicho concepto únicamente correspondería cuando exista una debida contratación, así como la emisión de conformidad con anterioridad al requerimiento de pago; situación que no se presenta; tal como lo manifiesta el Jefe de Abastecimiento en su Informe N° 060-2024-ABAST-UNP. c) Asimismo, se deberá disponer el inicio del deslinde de responsabilidades contra los funcionarios y/o servidores de la UNP que incumplieron con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normativa para una adecuada contratación. d) Por tal motivo, se debe emitir la Resolución correspondiente;

Que, es de indicar que, a todas las contrataciones en la Entidad, para la adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, les resulta exigible la aplicación de la normativa de Contrataciones del Estado; incluso -en lo que corresponde- a aquellas contrataciones menores a ocho (8) UIT. En sentido, las contrataciones deben efectuarse siguiendo todos los procedimientos, formalidades y/o exigencias legales dentro de los plazos establecidos por la propia normativa -desde su requerimiento hasta el término de su ejecución contractual (liquidación y pago)- y, siempre, de manera oportuna para satisfacer la necesidad pública objeto de la contratación, bajo responsabilidad de los servidores o funcionarios y de las dependencias u órganos que se encargan o participan de las mismas;

Que, es importante señalar que una de las características principales de los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado es que estos involucran prestaciones recíprocas. Así, si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista;

Que, al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute, de esta manera, la normativa de contrataciones



RESOLUCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 0268-2024-DGA-UNP

Piura, 04 de junio de 2024

del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución;

Que, realizadas las precisiones anteriores, debe indicarse que, si una Entidad obtuvo una prestación por parte de un proveedor, este tendría derecho a exigir que la Entidad le reconozca el pago respectivo -aun cuando la prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado—, pues el Código Civil, en su artículo 1954, establece que *"Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo"*;

Que, de esta manera, la acción por enriquecimiento sin causa reconocida por el Código Civil constituye un *"mecanismo de tutela para aquel que se ha visto perjudicado por el desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en beneficio de otro. El primero, será el actor o sujeto tutelado y, el segundo, el demandado o sujeto responsable (...)"*;

Que, ahora bien, para que se configure un enriquecimiento sin causa y, por ende, pueda ejercitarse la respectiva acción, es necesario que se verifiquen las siguientes condiciones: *"a) el enriquecimiento del sujeto demandado y el empobrecimiento del actor; b) la existencia de un nexo de conexión entre ambos eventos; y c) la falta de una causa que justifique el enriquecimiento"*;

Que, Morón Urbina indica que se necesitan de modulaciones necesarias para la adaptación del enriquecimiento sin causa en el derecho administrativo, habiendo sido señalados tres requisitos por el derecho comparado: a) el asentimiento tácito o expreso de la Administración; b) la buena fe del particular; y, en menor medida c) la comprobación de la utilidad pública de hecho recibida a su favor¹. Asimismo, a criterio del mismo autor, el instituto del enriquecimiento sin causa se puede aplicar a tres casos: Primero, en el caso de prestaciones realizadas en ejecución de contratos administrativos invalidados y antes de que se notifique su nulidad sin que sea posible la restitución de las prestaciones, segundo, en el caso de prestaciones realizadas en la creencia de estar cumpliendo un contrato que aún no se ha perfeccionado o prestaciones posteriores a un contrato que ya se extinguió y, tercero, prestaciones de un contratista superiores a la que estaba obligado contractualmente²;

Que, el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado, a través de su Opinión N°065-2022/DTN³, ha señalado en su punto 3. Conclusión, *"La Entidad que hubiese advertido la configuración de los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa –en una decisión de su exclusiva responsabilidad– podría reconocer de forma directa el monto que pudiera corresponder por dicho concepto. De ser ese el caso, es preciso que la Entidad coordine cuando menos con su área de asesoría jurídica interna y con la de presupuesto. (...)"*;

Que, es importante precisar que un requisito adicional para que se configure un enriquecimiento sin causa en el marco de las contrataciones del Estado es que este no sea el resultado de actos de mala fe del empobrecido; es decir, el proveedor debe haber ejecutado las prestaciones de buena fe, lo que implica necesariamente que hayan sido válidamente requeridas o aceptadas por el funcionario o funcionarios competentes de la Entidad. Cabe precisar que similar criterio es adoptado también por el Código Civil para determinados supuestos en los que no se otorga derecho a pago alguno a los terceros que, de mala fe, realizan construcciones en terreno ajeno;

Que, en esta situación corresponde a la autoridad que conozca y resuelva dicha acción evaluar si la Entidad se ha beneficiado o enriquecido a expensas del proveedor con la prestación ejecutada, en cuyo caso, en aplicación de los principios generales que prohíben el enriquecimiento sin causa, ordenaría a la Entidad no sólo reconocer el íntegro del precio del mercado de las prestaciones ejecutadas, y sus respectivos intereses, sino también las costas y costos derivados de la interposición de la acción;

Que, en virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores, que incumplieron con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado para llevar a cabo sus contrataciones, es importante señalar que el proveedor que con buena fe ejecuta determinadas prestaciones a favor de una Entidad, sin que medie un contrato que los vincule o sin cumplir con algunas de las formalidades y procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, podría requerir una indemnización por el precio de mercado de dichas prestaciones, en observancia del principio que prescribe el enriquecimiento sin causa recogido en el artículo 1954 del Código Civil;

¹ Morón Urbina, J. (2016) La Contratación estatal. Lima: Gaceta Jurídica. p. 726

² Morón Urbina, J. (2016) Ibid. pp. 729-730

³ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3573660/Opini%C3%B3n%20065-2022-%20PRONIS%20-%20Enriquecimiento%20sin%20causa%20en%20las%20contrataciones%20del%20Estado.pdf>





UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 0268-2024-DGA-UNP

Piura, 04 de junio de 2024

Que, la presente, pretende el reconocimiento de la deuda contraída con la señora Graciela Margot Ayala Rosas con RUC N° 10028674371, en calidad de Representante Legal de la empresa JM Tecnología Y Soluciones Informáticas; por reconocimiento del pago del servicio "Acondicionamiento del Ambiente de Radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura", año 2023, por el monto de S/ 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles);

Que, el inciso 3) del artículo 175 del Estatuto de la Universidad Nacional de Piura, prescribe: "El Rector es el representante legal de la Universidad y ejerce el gobierno de la misma (...)", señalando dentro de sus funciones, "inciso 3) Dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera".

Que, el artículo 44 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Piura, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 037-CU-2021, de fecha 26.02.2021, establece: Funciones Generales de la Dirección General de Administración: "(...) 44.13 Emitir actos administrativos o de administración que correspondan en el marco de las competencias asignadas en la normatividad vigente". "(...) 44.15 Expedir resoluciones en las materias de su competencia". "(...) 44.16 Las demás funciones que le asigne el Rectorado en el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa (...)";

Que, por los considerandos facticos y jurídicos expuestos y contando con los Informes Técnicos y Legal favorables, resulta viable el "reconocimiento de deuda", la cual será cancelada con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;

Estando a lo dispuesto por la Dirección General de Administración, en uso de sus atribuciones legales conferidas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- RECONOCER, el Importe Adeudado ascendente a un total de S/ 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles), a favor de doña **GRACIELA MARGOT AYALA ROSAS**, en calidad de Representante Legal de la empresa JM TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS con RUC N° 10028674371; por concepto del servicio de "ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DE RADIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA", AÑO 2023, de conformidad con lo solicitado con Oficio N° 350-2024-D-FCCSSE-UNP de fecha 30 de abril de 2024, por la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura, y al sustento técnico y legal expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER, a las Unidades de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería de la Universidad Nacional de Piura, realicen los trámites correspondientes para la cancelación de la obligación pendiente de pago, en concordancia con los fines expuestos en los considerandos de la presente Resolución y de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución y sus antecedentes a la Unidad de Recursos Humanos, para que ponga en conocimiento de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios la presente Resolución e inicie las acciones que correspondan para el deslinde de responsabilidades de los servidores y/o funcionarios que han propiciado que las prestaciones efectuadas por el proveedor se hayan realizado sin que haya mediado un contrato válido, para lo cual la Unidad de Abastecimiento deberá brindar la información que ésta solicite; conforme lo señalado en el Oficio N.º 670-2024-OCAJ-UNP, de fecha 29 de mayo de 2024, suscrito por el Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica.

ARTÍCULO 4.- CARGAR, el egreso que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución, a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia, conforme a lo señalado por el Jefe de la Unidad de Presupuesto, mediante Certificación Presupuestal N° 0308-2024-UP-OPYPTO-UNP de fecha 27 de mayo de 2024.

ARTÍCULO 5.- HÁGASE, de conocimiento la presente Resolución a las Unidades de Tesorería; Contabilidad; Oficina Central de Asesoría Jurídica; Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y demás órganos administrativos de la Universidad Nacional de Piura.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR, la Resolución al proveedor, en su domicilio.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.

FYSO/VHBA
C.c.
RECTOR
OPYPTO
UT
UC
UA
URH (2)
INT
FCCSSE
OCAJ
ARCHIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
M.Sc. **ESTIMA Y. SANDOVAL OLIVA**
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN